

Santiago de Cali, noviembre del 2023

Señores

JUEZ ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO -REPARTO

Ciudad

Ref. **Medio de control- Reparación Directa**

Demandante Carlos Enrique Flórez y otros

Demandado Distrito de Santiago de Cali

notificacionesjudiciales@cali.gov.co

secretaría de Infraestructura

notificacionesinfraestructura@cali.gov.co

JOSE JULIAN ARANGO ESCOBAR identificado con cédula de ciudadanía No. 1.116.258.847 de Tuluá y portador de la tarjeta profesional de Abogado No. 352.270 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderado judicial de **CARLOS ENRIQUE FLOREZ, LIZBETH JOHANA GUERRERO GARCIA, MARIA BLANCISNET FLOREZ RIOS**, actuando a nombre propio y de acuerdo al poder otorgado, acudo ante esta jurisdicción para impetrar medio de control- demanda de Reparación Directa en contra del **Distrito de Santiago de Cali, Secretaria de Infraestructura del Distrito de Santiago de Cali**, para que por los medios previstos en el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, con citación y audiencia de la parte demandada y del agente del Ministerio Público, se declare su responsabilidad patrimonial de los perjuicios causados a la parte demandante como consecuencia de las lesiones y perturbaciones sufridas por el señor CARLOS ENRIQUE FLÓREZ, en el siniestro vial ocurrido a los veinticinco (25) días del mes de abril del año dos mil veintidós (2022) a la altura de la carrera 23 con calle 6ª- Barrio La Alameda en Cali cuando se movilizaba en calidad de conductor de motocicleta y presentó volcamiento debido al mal estado de la vía, se encontraban haciendo un bacheo, pero no había ningún tipo de señalización que indicara que se encontraban interviniendola.

LAS PARTES Y SUS REPRESENTANTES

1. **PARTE CONVOCANTE:** Está compuesta por las siguientes personas:

CARLOS ENRIQUE FLOREZ, afectado, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.416.910 de Cali (Valle del Cauca)

LIZBETH JOHANA GUERRERO GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.143.841.985 de Cali (Valle del Cauca)

MARIA BLANCISNET FLOREZ RIOS, identificada con cédula de ciudadanía No. 38.973.611 de Cali (Valle del Cauca)

Apoderado de la parte demandante. JOSÉ JULIÁN ARANGO ESCOBAR identificado con cédula de ciudadanía No. 1.116.258.847 de Tuluá y portador de la tarjeta profesional de Abogado No. 352.270 del Consejo Superior de la Judicatura.

PARTE DEMANDANTE

Corresponde al Distrito de Santiago de Cali y la secretaría de infraestructura del Distrito Judicial de Santiago de Cali.

PRETENSIONES

PRIMERA. Que se declare patrimonialmente responsable al Distrito de Santiago de Cali y a la secretaría de infraestructura del Distrito Judicial de Santiago de Cali, Por todos los perjuicios ocasionados a **CARLOS ENRIQUE FLOREZ, LIZBETH JOHANA GUERRERO GARCIA, MARIA BLANCISNET FLOREZ RIOS**, a raíz de las lesiones y perturbaciones económicas psicológicas sufridas por el señor Carlos Enrique Flórez a los veinticinco (25) días del mes de abril del dos mil veintidós (2022) sobre la calle 6a # con carrera 23 cuando se movilizaba en calidad de conductor de la motocicleta de placa HVW06D, marca Bajaj y presentó volcamiento debido al mal estado de la vía, se encontraban haciendo un bacheo, pero no había ningún tipo de señalización que indicara que se encontraban interviniéndola; para la fecha de los hechos la calzada estaba siendo reparada por tramos y no contaba con ningún tipo de señalización. Después de varias intervenciones quirúrgicas y constantes tratamientos médicos, fue valorado por el Instituto Nacional de Medicina Legal quien a los once (11) días del mes de abril del año dos mil veintitrés (2023) en donde determinan-
SECUELAS MÉDICO LEGALES: Deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente; Perturbación funcional de miembro superior izquierdo de carácter permanente.

SEGUNDA. Que, como consecuencia obligada de la anterior declaración, se condene a las entidades demandadas a pagar las siguientes sumas de dinero:

I. PERJUICIOS MATERIALES

1.1. Lucro Cesante. Su fundamento en el caso bajo examen se encuentra en la pérdida de capacidad laboral del señor Carlos Enrique Flórez, como consecuencia de las lesiones físicas y perturbaciones psicológicas/psiquiátricas causadas en el suceso que

da origen a esta reclamación. Para la liquidación de este perjuicio se tendrá en cuenta:

- (i) El porcentaje de la pérdida de capacidad laboral, **que podrá estar oscilando** en un treinta por ciento (30%), según las características de las afectaciones físicas y psicológicas/psiquiátricas sufridas por Carlos Enrique Flórez
- (ii) Los ingresos promedio mensuales, es decir para los efectos el salario mínimo mensual vigente para la época en que ocurrió el siniestro abril del año dos mil veintidós (2022)
- (iii) El periodo de vida probable del afectado, es decir con cincuenta (50) años de expectativa de vida laboral, de conformidad con el documento de Proyecciones de Población expedido por el Departamento Nacional de Estadística de septiembre de 2022.

La suma arrojada será actualizada, conforme la siguiente fórmula:

$$Ra = R \times \frac{\text{Índice Final}}{\text{Índice Inicial}}$$

Donde los factores equivalen a:

Ra Renta actualizada que se busca
 R La renta o ingreso a actualizar para la fecha de los hechos
 Índice final Índice de precios al consumidor a la fecha del incidente regulador
 Índice inicial Índice de precios al consumidor a la fecha de causación del perjuicio

La indemnización comprenderá dos periodos:

a. Vencido o consolidado, que se establezca aplicando la fórmula:

$$Rc = \frac{Ra (1+i)^n - \frac{Ra}{i}}{i}$$

Rc Lucro cesante consolidado
 Ra ingreso base de liquidación
 i Interés puro o técnico del 6 % mensual o 0.004867 mensual
 n Período (número de meses) que comprende la indemnización, que va desde la fecha de ocurrencia del hecho, hasta aquella probable de ejecutoria del auto.

b. Futuro o anticipado, que se halla mediante la fórmula:

$$Rf = \frac{Ra (1+i)^n - 1}{i (1+i)^n}$$

- Rf Lucro cesante futuro
- Ra Ingreso base de liquidación
- i interés puro
- N número de meses a liquidar

De acuerdo con los factores mencionados y contando que el señor Carlos Enrique Flórez nació el 27 de septiembre de 1974, de manera que para la fecha de los hechos contaba con 48 años de edad, por ende, tiene un periodo de vida probable de 29.46 años equivalentes a 353.52 meses

Podría tasarse aproximadamente este perjuicio en la suma de ciento setenta millones de pesos (\$170.000. 000.00) m/cte., o lo que resulte probado.

II. PERJUICIOS INMATERIALES

II.1 Perjuicios morales

La tradicional concepción del daño moral se centra en el daño ocasionado al ámbito afectivo o sentimental de la persona, lo que trae como consecuencia, sufrimiento, dolor, perturbación espiritual, situaciones, que como se demostrará; se evidenciaron tanto en el afectado, su madre y su compañera permanente.

Atendiendo los principios de Reparación Integral y Equidad que señala el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, y la sentencia del Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia 27001233100020090017701 (41517), Sep. 17/18.la valoración del perjuicio moral se tendrá en salarios mínimos legales mensuales, por lo cual se tarará así:

Es preciso mencionar que se realiza la tasación de perjuicios morales asumiendo que la pérdida de capacidad del señor Carlos sea de un 30% o lo que resulte probado

<div><p>ABOGADOS & ASOCIADOS</p></div> <div>NOMBRE</div>			CALIDAD		V/R SMLMV
CARLOS ENRIQUE FLOREZ			VÍCTIMA DIRECTA		60
MARIA BLANCISNET FLOREZ RIOS			MADRE		60
LIZBETH JOHANA GUERRERO GARCIA			COMPAÑERA PERMANENTE		60

2.2. Daño a la salud o fisiológico.

El Consejo de Estado en sentencia del día catorce (14) de septiembre de dos mil once (2011), radicación número 05001-23-25-000-1994-00020-01 (19031), actor: Antonio José Vigoya Giraldo y otros, adoptó una nueva tipología de los perjuicios inmateriales que durante años ha venido definiendo, acogiendo “el daño a la salud” como un nuevo concepto que además desplaza toda una clasificación que de los daños inmateriales diferentes a la moral se construyó jurisprudencialmente durante años. Sostuvo la Corporación

Entonces, como se aprecia, el daño a la salud gana claridad, exactitud y equidad donde los precisados perjuicios la pierden, puesto que siempre está referido a la afectación de la integridad psicofísica del sujeto, y está encaminado a cubrir no sólo la modificación de la unidad corporal sino las consecuencias que las mismas generan, razón por la que, sería comprensivo de otros daños como el estético, el sexual, el psicológico, entre otros, sin que existiera la necesidad de ampliar en demasía la gama o haz de daños indemnizables, con lo que se conseguiría una sistematización del daño no patrimonial. En otros términos, se insiste, en Colombia el sistema indemnizatorio está limitado y no puede dar lugar a que se abra una multiplicidad de categorías resarcitorias que afecten la estructura del derecho de daños y la estabilidad presupuestal que soporta un efectivo sistema de responsabilidad patrimonial del Estado, motivo por el que, se itera, cuando el daño se origine en una lesión psíquica o física de la persona el único perjuicio inmaterial, diferente al moral que será viable reconocer por parte del operador judicial será el denominado “daño a la salud o fisiológico”, sin que sea posible admitir otras categorías de perjuicios en este tipo de supuestos y, mucho menos, la alteración a las condiciones de existencia, categoría que bajo la égida del daño a la salud pierde relevancia, concreción y pertinencia para indemnizar este tipo de afectaciones.

ABOGADOS & ASOCIADOS
En ese orden de ideas, insistió

el concepto de salud comprende diversas esferas de la persona, razón por la que no sólo está circunscrito a la interna, sino que comprende aspectos físicos y psíquicos, por lo que su evaluación será mucho más sencilla puesto que ante lesiones iguales corresponderá una indemnización idéntica. Por lo tanto, no es posible desagregar o subdividir el daño a la salud o perjuicio fisiológico en diversas expresiones corporales o relacionales (v.gr. daño estético, daño sexual, daño relacional familiar, daño relacional social), pues este tipo o clase de perjuicio es posible tasarlo o evaluarlo, de forma más o menos objetiva, con base en el porcentaje de invalidez decretado por el médico legista.” (Resaltado fuera de texto).

Bajo las consideraciones de las graves lesiones sufridas por el señor Carlos Enrique Florez a causa del mal estado de la vía, tenemos un desmedro en su salud que generó afectaciones psico-físicas que deberá ser reparada por la institución convocada.

La tasación del presente perjuicio, se estima aproximadamente en sesenta (60) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión que apruebe el acuerdo.

Daño del derecho a la recreación, al aprovechamiento del tiempo libre, como daño a otro derecho constitucional.

El objetivo de la reparación es fundamentalmente devolver las cosas a su estado primitivo, *in natura*; no obstante, hay eventos que por su naturaleza impiden lograr ese tipo de reparación, de allí que surjan las **indemnizaciones y las compensaciones como forma reparatoria**. No obstante, la reparación no puede traducirse en un beneficio para el perjudicado, es decir no puede ir más allá, o de percibir más de lo que perdiere como consecuencia del daño.

Si bien es cierto la jurisprudencia del Consejo de Estado ha realizado serios estudios que permitan estructurar una tipología adecuada de los daños inmateriales, construida sobre la base de los principios de reparación integral y el "no enriquecimiento sin causa", no ha sido del todo pacífica la discusión, aún más cuando el escenario ofrece un alto grado en la polémica pues la doctrina refiere multiplicidad de daños inmateriales; la evidente dualidad de conceptos en lo que atañe a la finalidad de la reparación, es decir si se indemniza el daño evento o la consecuencia del mismo. Sin embargo, encontramos que en el mismo sentido nuestro Consejo de Estado advierte, a pesar de categorizar los daños inmateriales en clases que no llamen a confusiones, el daño moral y daño a la salud; la viabilidad de encontrar otros daños inmateriales, atendiendo el interés y el derecho permeado por el evento antijurídico, aunque permitiéndolo únicamente en asuntos diferentes a las reclamaciones por lesiones psicofísicas. Sostuvo

ABOGADOS & ASOCIADOS

*Desde esa perspectiva, se insiste, el daño a la salud comprende toda la órbita psicofísica del sujeto. En consecuencia, la tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) **cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de "daño corporal o afectación a la integridad psicofísica" y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta Corporación//***

Sin embargo, debemos comprender que el daño a la salud, no obstante, envuelve el daño- evento y el daño-consecuencia, su capacidad reparatoria no abarca el menoscabo de otro tipo de intereses y derechos amenazados o quebrantados, que no hacen parte de la consecuencia de la lesión psico-física.

Al respecto la H. Corte Suprema de Justicia, ha sostenido:

//Desde esta perspectiva, y en contraposición al daño estrictamente patrimonial, el perjuicio extrapatrimonial no se reduce al tradicional menoscabo moral, pues dentro del conjunto de bienes e intereses jurídicos no patrimoniales que pueden resultar afectados mediante una conducta dolosa o culposa se encuentran comprendidos aquéllos distintos a la aflicción, el dolor, el sufrimiento o la tristeza que padece la víctima. En este contexto, son especies de perjuicio no patrimonial –además del daño moral– el daño a la salud, a la vida de relación, o a bienes jurídicos de especial protección constitucional tales como la libertad, la dignidad, la honra y el buen nombre, que tienen el rango de derechos humanos fundamentales.

Así fue reconocido por esta Sala en providencia reciente, en la que se dijo que ostentan naturaleza no patrimonial: "...la vida de relación, la integridad sicosomática, los bienes de la personalidad –verbi gratia, integridad física o mental, libertad, nombre, dignidad, intimidad, honor, imagen, reputación, fama, etc.–, o a la esfera sentimental y afectiva..." (Sentencia de casación de 18 de septiembre de 2009) [Se subraya]

Estas subespecies del daño extrapatrimonial no pueden confundirse entre sí, pues cada una de ellas posee su propia fisonomía y peculiaridades que las distinguen de las demás y las hacen merecedoras de tutela jurídica; aunque a menudo suele acontecer que confluyan en un mismo daño por obra de un único hecho lesivo.

Discurrió la misma Corporación en este sentido:

*//De ahí que **el daño no patrimonial se puede presentar de varias maneras**, a saber: i) mediante la lesión a un sentimiento interior y, por ende, subjetivo (daño moral); ii) como privación objetiva de la facultad de realizar actividades cotidianas tales como practicar deportes, escuchar música, asistir a espectáculos, viajar, leer, departir con los amigos o la familia, disfrutar el paisaje, tener relaciones íntimas, etc., (daño a la vida de relación); o, iii) como **vulneración a los derechos humanos fundamentales como el buen nombre, la propia imagen, la libertad, la privacidad y la dignidad, que gozan de especial protección constitucional.***

Las dos primeras formas de perjuicio han sido amplia y suficientemente desarrolladas por esta Corte. El menoscabo a los bienes jurídicos personalísimos de relevancia constitucional, en cambio, aunque se ha enunciado tangencialmente por la jurisprudencia, no ha sido materia de profundización, dado que hasta ahora no se había planteado ese asunto en sede de casación//.

Y es que esta nueva concepción, como lo sostiene la alta Corporación de la jurisdicción ordinaria, obedece a que "el constitucionalismo se convirtió de ese modo en el nuevo paradigma del orden jurídico, cuyo influjo ha repercutido en las demás áreas del derecho positivo, incluido el derecho civil, naturalmente, que además de la función que tradicionalmente ha cumplido como regulador de las relaciones privadas, asume ahora un carácter protector de los derechos inalienables.

(...) La atención debe centrarse, entonces, no en la posibilidad de admitir la indemnización del daño a los bienes personalísimos protegidos por la Constitución y por los tratados internacionales que reconocen derechos fundamentales, como categoría autónoma perteneciente al género de los perjuicios extrapatrimoniales – pues su existencia hoy en día no se pone en duda–; sino en precisar en qué casos

resulta viable su concesión, con el fin de evitar un pago doble o exagerado de una misma consecuencia nociva que tiene su causa adecuada en un único evento.

De manera que, por regla general, el desagravio del perjuicio no patrimonial carece de la virtualidad de producir un enriquecimiento injusto, pues los bienes jurídicos inherentes a la persona humana no tienen equivalencia en dinero. Luego, si la medida de satisfacción que se reconoce no lleva implícito un provecho económico sino más bien de simple consolación, satisfacción o compensación, entonces es desacertado afirmar que la misma puede dar lugar a cualquier tipo de lucro (...).

Así pues en aras de satisfacer cada interés legítimo lesionado con el hecho dañoso, en el caso de autos, tenemos que además de apalear sus derechos fundamentales a la vida, el respeto por la integridad física, se generó el menoscabo de un interés diferente que no es resarcido con el reconocimiento del daño a la salud, pues además de afectarse la integridad física, el menoscabo de otros derechos constitucionales, se han visto sacudidos, como consecuencia de la afectación, así sus actividades cotidianas, deportivas, recreacionales, resultaron frustradas por la incapacidad física arrojada. De tal suerte que el disfrute a plenitud de su vida, la recreación, como un derecho fundamental, se han visto seriamente afectados con la situación ocurrida.

Recordemos que el contenido del artículo 52 constitucional, del derecho al deporte a la recreación y la educación física, plantea en su núcleo esencial la función a nivel individual, el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y, a nivel social, el desarrollo social del país a través de su función socializadora, integradora y pacificadora.

La consagración del deporte como derecho tuvo como referente internacional el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que consideró al deporte como un derecho social. En 1978, la Carta Internacional de Educación Física y Deporte, adoptada por la UNESCO ratificó en el mundo no sólo la importancia que tiene el deporte, sino también la educación física y la recreación como elementos esenciales dentro del sistema de educación, formación integral de las personas y enriquecimiento de la cultura.

Sin duda alguna la aniquilación de algunas tareas recreacionales para el afectado, como el desarrollado de tareas deportivas y/o culturales desencadenaron un desarrollo anormal de su vida que debe ser reparado, por la conculcación de su derecho constitucional a la recreación, al despliegue de actividades lúdicas, de la capacidad para su realización, que como consecuencia del daño sufrido se

generaron.

La tasación del presente perjuicio, se estima aproximadamente en veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión que apruebe el acuerdo, y a favor del lesionado.

OTRAS MEDIDAS REPARATORIAS

La jurisprudencia de la alta corporación de lo contencioso administrativo ha expuesto la necesidad de reparar integralmente a la víctima del daño causado por las entidades públicas, que obedece no sólo a la materialización del principio de "reparación integral" que nuestro ordenamiento ha incorporado, sino en respuesta a la influencia de los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, gracias al denominado "Bloque de Constitucionalidad".

En virtud de la figura los jueces están sujetos a tener presente los instrumentos internacionales que se incorporan en nuestro compendio normativo, tal como puede interpretarse del contenido del artículo 93 constitucional. De allí que la jurisprudencia de los intérpretes autorizados de los instrumentos que hacen parte del bloque de constitucionalidad resulta efectivos al momento de interpretar el alcance de los derechos humanos y del propio Derecho internacional humanitario, y las maneras de su reparación. Precisamente el órgano judicial internacional ha trazado parámetros que nos muestra que la reparación a la víctima trasciende más allá de la obligación de dar, de lo pecuniario, para obligar al causante a hacer, como una forma de reparar integralmente el perjuicio causado.

Respecto a la procedencia de este tipo de medidas correctivas, el H. Consejo de Estado sostuvo:

Como se precisó, el daño antijurídico considerado como lesión de un derecho, bien o interés legítimo supone la alteración o afectación de un estado de cosas que impacta de manera negativa la esfera interna y externa de la persona que lo padece y, por consiguiente, no sólo comprende la órbita patrimonial. Así las cosas, el principal objetivo del derecho de daños consiste en reparar integralmente la afectación padecida por la persona en su vida, integridad o bienes, razón por la que a la hora de valorar la misma es necesario establecer e identificar si es posible que opere la restitutio in integrum y, de ser factible, adoptar las medidas deprecadas en la demanda -o que, dependiendo del caso concreto puedan ser decretadas de oficio por el juez- tendientes a que se restablezca el statu quo o estado de cosas anterior a su producción. Es decir, llevar a la víctima de un daño antijurídico a un estado como si no se hubiera producido, o en otros términos remover los efectos negativos que el mismo desencadena. No obstante, si lo anterior deviene imposible en términos materiales, resulta imprescindible establecer cuál es la magnitud del daño antijurídico y qué medidas de reparación pueden ser decretadas para resarcir las consecuencias de aquél, como por ejemplo la indemnización por equivalente. Así las cosas, la reparación no se asimila a indemnización, ya que esta última constituye uno de los varios componentes que integran a la primera y, por ende, la relación que existe entre uno y otro concepto es de género y especie, motivo por el cual el daño antijurídico desde el paradigma actual de la reparación desborda el que impone el concepto de patrimonio. Los anteriores lineamientos se acompañan con las posturas y tendencias modernas de la

responsabilidad que desbordan el concepto de "responsabilidad patrimonial", para adoptar la categoría de "derecho de daños", en el que el eje central lo constituye la persona que padece la afectación y, por consiguiente, la principal función de la responsabilidad en el mundo moderno consiste no tanto en sancionar conductas como en restablecer los derechos, bienes o intereses legítimos que se afectan con la producción de un daño. En ese orden de ideas, la Sala ante la gravedad de los hechos en el caso sub examine, adoptará una serie de medidas y determinaciones que apuntan a reparar de manera integral el daño irrogado a los demandantes, constituido aquél no sólo por los perjuicios materiales e inmateriales que tienen repercusión patrimonial y que fueron determinados en los acápites anteriores, sino, adicionalmente, por las graves y significativas vulneraciones a los derechos humanos -fundamentales- de los demandantes.

TERCERO. Que el valor de la indemnización acordada se liquide con la causación de los intereses desde la fecha del reconocimiento hasta el momento efectivo del pago de la suma conciliada.

HECHOS

PRIMERO. El núcleo familiar del señor **CARLOS ENRIQUE FLÓREZ** está compuesto por su compañera sentimental, la señora **LIZBETH JOHANA GUERRERO GARCIA** y su señora madre **MARIA BLANCISNET FLOREZ RIOS**, quienes se tienen gran respeto, afecto y amor entre ellos, por lo que se vieron afectados notablemente por el estado de salud del señor Carlos Enrique Flórez a causa de accidente de tránsito.

SEGUNDO. El señor Carlos Enrique Flórez y la señora Lizbeth Johana Guerrero García conviven bajo el mismo techo hace aproximadamente 10 años como lo evidencia en la declaración extra-juicio que se aportará en la relación de medios probatorios. La pareja se ha distinguido por el cariño profesado de ambos, su espíritu de superación y vocación de trabajo.

TERCERO. Para el año en que ocurrieron los hechos el señor Flórez devengaba un salario mínimo de UN MILLÓN DE PESOS (\$1.000.000) como se valida en los anexos presentados en la relación de medios probatorios.

CUARTO. El veinticinco (25) de abril del dos mil veintidós (2022) a la altura de la calle 6a con carrera 23 en Cali, presentó accidente de tránsito cuando se movilizaba en calidad de conductor de la motocicleta de placa HVW06D, marca Bajaj y presentó volcamiento debido al mal estado de la vía, se encontraban haciendo un bacheo, pero no había ningún tipo de señalización que indicara que se encontraban interviniéndola.

QUINTO. El siniestro ocasionó graves afectaciones a la salud del señor Carlos Enrique Flórez, quien ingresó al centro asistencial con trauma en hombro izquierdo, fractura de tuberosidad mayor del húmero, lesión del tendón supraespinoso izquierdo; le realizan cirugía con material de osteosíntesis y le realizan todo el proceso de recuperación

(Terapias físicas) pero aun así y como lo determina medicina legal quedó con perturbación funcional de carácter permanente.

SEXTO. Desde el accidente el señor Carlos Enrique Flórez ha sido involucrado en constantes tratamientos clínicos para superar sus dolencias, que han permeado notablemente su capacidad física que se ha visto reflejado en el impedimento para el desarrollo normal de su actividad económica de la que estuvo alejado por varios meses, súmese a la evidente pérdida de su capacidad física para el desenvolvimiento de sus faenas laborales que sin duda alguna repercutirán en su productividad.

SÉPTIMO. Esta lamentable condición física provocó que, durante mucho tiempo, requiriera del apoyo de su compañera permanente y su madre, quienes con un amor incondicional lo acompañaron durante todo el proceso.

OCTAVO. El episodio ha ocasionado un desconsuelo absoluto al lesionado, tristes son las consecuencias del nefasto suceso, generado a la víctima y familiares, producto de los constantes episodios depresivos que han permeado a la totalidad del grupo familiar. Condición que se ha reflejado en la apatía al desarrollo de los eventos recreativos que realizaban con cierta asiduidad.

NOVENO. El señor Carlos Enrique Flórez estuvo incapacitado aproximadamente 7 meses, limitado en sus labores profesionales, recreativas, hecho que afectó notablemente su capacidad económica y que generó perjuicios en su salud física/mental.

DÉCIMO. El señor Carlos Enrique Flórez fue valorado por Medicina Legal a los once (11) días del mes de abril del dos mil veintitrés (2023) por el profesional Edgar Mauricio Ortega López - Profesional Especializado Forense, quien le proporciona incapacidad médico legal definitiva por cincuenta y cinco (55) días. SECUELAS MÉDICO LEGALES: **Deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente, perturbación funcional de miembro superior izquierdo de carácter permanente.**

DÉCIMO PRIMERO. El siniestro vial fue atendido por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Cali, quienes fueron los encargados de prestar la atención médica inicial a mi representado, al mismo tiempo de trasladarlo al centro asistencial correspondiente.

DÉCIMO SEGUNDO. El señor Carlos a la fecha de los hechos contaba con diecinueve (19) años de experticia conduciendo este tipo de automotores, ha desarrollado actividades laborales como repartidor/ domiciliario que han permitido que tenga conocimiento de la infraestructura vial de la ciudad y desarrolle esta actividad con responsabilidad e inteligencia vial.

DÉCIMO TERCERO. No presenta multas en el portal Web del Simit, no registra inmovilizaciones a vehículos a raíz de accidente de tránsito como se evidencia en la CDAV y no reporta accidentes de tránsito en la base de Datos de la secretaría de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Cali.

DÉCIMO CUARTO. Para la fecha de los hechos el señor Carlos Flórez portaba todos los documentos de su vehículo automotor en regla, la motocicleta se encontraba asegurada con la compañía de seguros PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS con póliza soat No 108004214870000 con fecha de vigencia desde el 12-04-2022 al 11-04-2023.

DÉCIMO QUINTO. El señor Carlos Enrique Flórez contaba con licencia de conducción vigente, expedida por la secretaria de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Cali No. 94.416.910

DÉCIMO SEXTO. Los hechos en tiempo, modo y lugar fueron reportados mediante denuncia a la fiscalía general de la Nación y por reparto el caso le correspondió a la fiscalía 117 Local, bajo el número spoa 760016099165202267663

DÉCIMO SÉPTIMO. El señor Carlos Enrique Flórez a la fecha tiene limitaciones en su hombro izquierdo, presenta dolor cuando lleva el brazo hacia atrás o levanta el brazo hacia el costado izquierdo, cuando debe levantar algo siente tirón/ pinchazo en el brazo, presenta calambres y no puede hacer actividades repetitivas.

DÉCIMO OCTAVO. El mantenimiento de la vía pública donde ocurrió el incidente corresponde a las entidades demandadas Municipio Santiago de Cali- secretaria de Infraestructura, tal como se confirma en el contenido del comunicado fechado para los veintiocho (28) días del mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023) firmado por la Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial de Santiago de Cali, agregado a la reclamación.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Constitución Nacional, artículos 1, 2, 6, 90, 93, 217, 318 y 365.

Artículo 2

Las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del estado.

En su artículo 90, reza:

El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas

Convención Americana de Derechos Humanos²¹, artículos 1,

11, 22. Sostiene en su artículo 1,

Obligación de Respetar los Derechos

1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.

Artículo 4. Derecho a la Vida

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

(...)"

Por su parte en el artículo 5 se destaca el Derecho a la Integridad Personal

"1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral."

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Ley 1437 de 2011.

La Ley 446 de 1998, artículo 16

FUNDAMENTOS DE LA RECLAMACIÓN

1. Fundamento constitucional de la responsabilidad patrimonial de la administración pública.

El artículo 1 de nuestra Carta Política concibe el Estado Social de Derecho como aquel de profundo respeto por la dignidad humana y la solidaridad de las personas con una prevalencia del interés general sobre el particular; norma que debe concordarse con el artículo 2 en su inciso 2 al determinar que

"las autoridades de la República están instituidas - para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derecho y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares".

El artículo 90 de nuestra Constitución señala que *El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas*". La última parte de este inciso hace relación a la causalidad, y de ella depende el examen de la imputación o adjudicación del daño a las autoridades públicas.

Nuestra Carta en el citado artículo 90 nos enseña que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que se ocasionen como consecuencia de la acción u omisión de las autoridades públicas. Así las cosas, como lo ha distinguido la jurisprudencia y la doctrina, a partir de este texto constitucional el deber resarcitorio o de reparación a cargo del Estado emerge cuando se ha causado un **daño antijurídico** que le sea **imputable**.

Es así como, dentro de este nuevo universo constitucional, la responsabilidad no está únicamente ligada al actuar negligente, culposo o doloso, es decir a criterios subjetivos, desplazándose a criterios objetivos, fundamentados en principios de **justicia, equidad, solidaridad**, etc., en donde la importancia gira alrededor de quien sufre el daño. Es así, como puede hallarse el Estado obligado a resarcir un perjuicio causado a pesar que su actividad o actuación esté dentro de los marcos de la licitud. Esta filosofía jurídica, argumentada desde hace varios años, se alimenta con la esencia del artículo 90 de nuestra Constitución al disponer la responsabilidad estatal por los *daños antijurídicos*.

El daño antijurídico es fuente de responsabilidad estatal y a su vez la teoría de la responsabilidad objetiva adquiere fundamento constitucional, razón por la cual surge la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado como el punto de intersección a través del cual encuadra cualquier régimen de responsabilidad. El concepto de daño antijurídico no ha sido definido en nuestra legislación, pero hace

varios años la jurisprudencia colombiana ha venido formando la teoría de la Lesión resarcible fundamentada en el daño antijurídico, basados en la doctrina española, y es así como en distintos fallos emitidos por el Consejo de Estado se encuentra una concepción del daño antijurídico que lo consagra como el fundamento de todo deber y obligación de reparación.

De ahí, que el objetivo de la responsabilidad patrimonial del Estado es el restablecer el equilibrio económico roto cuando se lesiona un patrimonio particular por parte de la administración pública. Se ha pasado de la llamada antijuridicidad subjetiva, que exigía el dolo, la culpa o falta del funcionario de la administración para generar la responsabilidad del Estado, a la llamada antijuridicidad objetiva, **que tiene como fundamento el daño ocasionado a la víctima, que pasa a ser el elemento más importante de la responsabilidad patrimonial estatal.**

2. Régimen de la falla del servicio para derivar la responsabilidad de la entidad pública

Ahora debemos precisar los aspectos que nos llevan indefectiblemente a responsabilizar a la entidad pública de los perjuicios originados a los reclamantes, pues como se logrará demostrar en el devenir del proceso, esto es atribuible a la falla de la administración pública, en quien concurren los elementos constitutivos del régimen de falta como generadora del deber resarcitorio a cargo de ella. Para ello resulta indispensable que tengamos en cuenta lo que jurisprudencialmente se han destacado como los requisitos para la constitución de la falla administrativa:

Cuando el Estado, en desarrollo de sus funciones incurre en la llamada "FALTA O FALLA DEL SERVICIO", o mejor aún falta o falla de la administración, trátase de simples actuaciones, omisiones hechas y operaciones administrativas, se hace responsable de los daños causados al administrado. Esta es la fuente común y frecuente de la responsabilidad estatal y se requiere: a) Una falta o fallas del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta o falla de que se trata, no es la personal del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración; b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o ha dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano; c) Un daño, que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho, bien sea civil, administrativo, etc., con las características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc., y d) Una relación causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual aún demostrada la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización..."

Para efectos de hacer claridad de la responsabilidad que pudiere recaer sobre la entidad demandada es necesario referirse a los elementos estructurales que

conllevar a la afirmación que el incidente tuvo una causa directa y eficiente: El mal estado de la vía, se encontraban haciendo un bacheo, pero no había ningún tipo de señalización que indicara que se encontraban interviniéndola. Lo cual desencadenó que el señor Carlos Enrique Flórez cayera, provocando el nefasto desenlace. En el caso que nos ocupa, resultará evidente la falla de la entidad acusada, pues en primer demostraremos:

2.1. El hecho irregular. Es sabido que corresponde a la administración departamental el debido mantenimiento de la vía pública donde ocurrió el aciago accidente, por ende, está a su cargo la revisión, corrección de imperfecciones, así como la señalización adecuada de la misma, en caso de alguna anomalía.

La seguridad de los usuarios de las vías públicas, es uno de los considerados deberes propios de las administraciones públicas, dentro de las finalidades que se propenden está el contar con una malla vial eficiente y tranquila para su tránsito, además de ser una razonada contraprestación a favor del beneficiario que auxilia o tributa a la institución para alcanzar tal designio.

Así entonces, si es deber del Municipio de Santiago de Cali y de la secretaría de Infraestructura del Distrito, como se indicó en párrafos precedentes, la conservación y mantenimiento de las vías públicas, el acontecimiento generador del perjuicio tuvo una causa exclusiva: simplemente la omisión de la entidad de cumplir con sus tareas. Esto significa, que el primer elemento constitutivo de la falla del servicio, **la existencia del hecho irregular, está expresándose fehacientemente.**

Ha sido abundante la línea jurisprudencial reiterando la obligación indemnizatoria a cargo del estado por la omisión en el cumplimiento de dicho deber:

El mantenimiento de una vía pública es obligación oficial que consiste en realizar permanentemente sobre ellas todas las obras y trabajos necesarios para que preste satisfactoriamente el servicio a que está destinada. Es deber del estado (municipio, departamento, nación, etc), velar en todo momento por esta misión y su cumplimiento, que no solo es instrumento material para realizar el derecho de tránsito o desplazamiento de un sitio a otro, que la ley garantiza a todas las personas, sino, además, como una compensación razonable y justa para quienes, con el cumplimiento de las cargas tributarias, han adquirido el derecho a un correcto funcionamiento de los servicios públicos. Normalmente el ejercicio del derecho de transitar no tiene por qué implicar riesgos diferentes de los que son inherentes a fallas de la conducta humana, o sea, de lo que pueden concebirse como independientes de la tarea del Estado respecto del instrumento para realizarlo, que son las vías de comunicación colocadas legal o convencionalmente bajo su responsabilidad. Esta supone un empeño constante para mantenerlas en tal estado de buen funcionamiento, que ni la integridad ni la vida de los

transeúntes corra peligro alguno derivado de imperfecciones, daños o desperfectos, carencia de medidas cautelares u otro hecho semejante¹

Después reiteró igualmente el mismo cuerpo colegiado:

Pero si no puede exigir que el Estado únicamente construya vías seguras y elimine peligros potenciales de los transeúntes, si es obligación actual del Estado Colombiano ACTUAR ante los peligros reales a que se encuentren sometidos los residentes en el país. Y debe actuar en primer término evitando que las personas se sometan al peligro, proporcionando soluciones que logren no tener que sortear situaciones peligrosas, vigilando que las personas no pasen por aquellos sitios y en fin asumiendo una actitud positiva ante los hechos reales que pueden hacer perder la vida a los bienes de los asociados. Si como se ha dicho, el Estado posee una especie de poderes administrativos y policivos que le permiten delimitar el campo de la prestación de los servicios, lógicamente ante verdaderas situaciones de peligro debe utilizar estos poderes, pues no debe olvidar que su primerísima obligación es la de garantizar y proteger la vida y los bienes de sus miembros. En estos casos, si no podrá exonerarse de la obligación contenida en el artículo 16 de la C.N. aduciendo la imposibilidad física de prevenir un daño o de evitarlo.²

Ahora bien, obviamente el hecho que se está endilgando a la institución demandada es el único factor que irrogó los perjuicios que se solicitan sean reparados.

La seguridad de la circulación en las vías públicas, no puede estar comprometida u obstaculizada por situaciones anormales, que constituyen una trampa mortal para los usuarios de las mismas, quienes al fin y al cabo solo ejercen una pluralidad de derechos y principios consagrados en la ley, tales como los que se recogen en las siguientes disposiciones: artículos 678 y 1005 del Código Civil, artículo 8 del decreto 21 de 1909, que hacen referencia al derecho de uso y goce de las vías públicas; el artículo 1º inciso segundo del Código Nacional de Tránsito, el capítulo octavo de la ley 336 de 1996, que desarrollan el principio de la seguridad entre otros; el artículo 24 de la Constitución Política que se refiere a la libertad de locomoción como un derecho fundamental; y todos ellos se acompasan con el denominado principio de la señalización en materia de tránsito de vehículos. En efecto se ha dicho.

“Sobre la importancia de la señalización la doctrina ha llegado inclusive a acuñar la expresión “Principio de señalización”, del cual se deriva que cuando las entidades que tienen a su cargo el deber de señalizar las vías públicas, omiten su cumplimiento o lo hacen de manera defectuosa comprometen las responsabilidades de las personas jurídicas en cuyo nombre actúan, por evidente falta o falla en el servicio público, a ellas encomendado. Se ve en este principio, que fuera de construir carreteras seguras y

¹ CONSEJO DE ESTADO, Sentencia del 22 de septiembre de 1966, A.C.E año XLI, tomo LXX y LXXI, No. 409-412.

² CONSEJO DE ESTADO, Sentencia del 7 de diciembre de 1997, C.P Dr. Julio César Uribe Acosta.

adecuadas a los requerimientos del tráfico y mantenerlas en buen estado, la administración tiene el deber primario de ejercer el control, en cuanto al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que ordenan su señalización y advierten los peligros. Si por falta o falla de la administración no se advierte a tiempo de los peligros; o advertida de ellos no los remedia; o deja pasar la oportunidad para hacerlo; en todos estos casos y otros similares, el Estado deberá la reparación de la totalidad de los daños y perjuicios que su falla en la prestación del servicio ocasione por la ausencia de señalización en las carreteras, lo que hace que no sean adecuadas y seguras.

La seguridad de los habitantes, o mejor de los usuarios de las vías públicas, es uno de los deberes propios de las entidades y personas vinculadas al control del tránsito en todo el territorio Nacional, así lo estableció el Decreto 1344 de 197022. Resulta evidente que cuando esa seguridad no es propiciada, antes bien, es cuestionada o puesta en peligro, por la inercia o negligencia de las autoridades llamadas a ejercer el control, las consecuencias gravosas para los particulares, que pueden seguirse de dichas omisiones o cumplimiento defectuosos de tales competencias, han de ser asumidas por las respectivas entidades públicas.

El artículo 112 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, considera las señales de tránsito así: Señales de reglamentación, o reglamentarias; señales de prevención o preventivas; y señales de información o informativas. Siendo las de prevención o preventivas aquellas que "tienen por objeto advertir al usuario de la existencia de un peligro y la naturaleza de este". Reviste tanta importancia la disposición sobre estos dos tipos de señales (las reglamentarias y las preventivas), que el propio Código Nacional de Tránsito Terrestre, se ocupó de establecer las dimensiones y características que deben tener las mismas"³

El mantenimiento de una vía pública es obligación oficial que consiste en realizar permanentemente sobre ellas todas las obras y trabajos necesarios para que preste satisfactoriamente el servicio a que está destinada. Es deber del Estado (municipio, Departamento, Nación, etc.), velar en todo momento por esta misión y su cumplimiento, que no solo es instrumento material para realizar el derecho de tránsito o desplazamiento de un sitio a otro, que la ley garantiza a todas las personas, sino, además, como una compensación razonable y justa para quienes, con el cumplimiento de las cargas tributarias, han adquirido el derecho a un correcto funcionamiento de los servicios públicos. Normalmente el ejercicio del derecho de transitar no tiene por qué implicar riesgos diferentes de los que son inherentes a fallas de la conducta humana, o sea, de lo que pueden concebirse como independientes de la tarea del Estado respecto del instrumento para realizarlo, que son las vías de comunicación colocadas legal o convencionalmente bajo su responsabilidad. Esta supone un empeño constante para mantenerlas en tal estado de buen funcionamiento, que ni la integridad ni la vida de los transeúntes corra peligro alguno derivado de imperfecciones, daños o desperfectos, carencia de medidas cautelares u otro hecho semejante."⁴

³ GIL Botero Enrique. Temas de Responsabilidad Extracontractual del Estado. Ed. Librería Jurídica Comlibros. Tercera edición. Bogotá D.C. Septiembre de 2006. Pag. 248 a 250.

⁴ Sentencia del 22 de septiembre de 1966. A.C.E año XLI, Tomo LXX y LXXI, No. 409-412

Después reiteró igualmente el mismo Cuerpo Colegiado:

*Pero si no puede exigir que el Estado únicamente construya vías seguras y elimine peligros potenciales de los transeúntes, si es obligación actual del Estado Colombiano ACTUAR ante los peligros reales a que se encuentren sometidos los residentes en el país. Y debe actuar en primer término evitando que las personas se sometan al peligro, proporcionando soluciones que logren no tener que sortear situaciones peligrosas, vigilando que las personas no pasen por aquellos sitios y en fin asumiendo una actitud positiva ante hechos reales que pueden hacer perder la vida o los bienes de los asociados. Si como se ha dicho, el Estado posee una especie de poderes administrativos y policivos que le permiten delimitar el campo de la prestación de los servicios, lógicamente ante verdaderas situaciones de peligro debe utilizar estos poderes, pues no debe olvidar que su primerísima obligación es la de garantizar y proteger la vida y los bienes de sus miembros. En estos casos, si no podrá exonerarse de la obligación contenida en el artículo 16 de la C.N. aduciendo imposibilidad física de prevenir un daño o de evitarlo."*⁵

Las condiciones están dadas efectivamente por la falta de protección, de seguridad a través de correcta señalización a lamentables acontecimientos, por más precavidos y cautelosos que sean los usuarios, porque tal vez lo que normalmente se acostumbra es desplazar la responsabilidad de la administración pública a la órbita del beneficiario del sector vial, situación a todas luces inexplicable pues no puede trasladarse un deber institucional a sus administrados, recordemos que el Estado es el que debe propender por brindar mejor calidad de vida.

2.2. Daño causado o nexo causal

Planteado que existió un hecho irregular de la autoridad pública, para poder invocar el deber indemnizatorio de la entidad estatal, encontramos asimismo que tal acto anómalo generó un perjuicio, un daño que surge única y exclusivamente del absurdo suceso. Como lo demostramos, el suceso desencadenó los perjuicios irrogados a los demandantes producto de la lesión del señor Carlos Enrique Florez tal como consta en su historial clínico.

2.3. Imputabilidad y causalidad.

Nuestra jurisprudencia ha decantado a partir de la lectura del artículo 90 constitucional que la responsabilidad patrimonial de una institución pública, deberá tenerse por probado el daño antijurídico y que éste pueda imputarse a la entidad acusada⁶

⁵ Sentencia del 7 de diciembre de 1997, C.P. Dr. Julio César Uribe Acosta.

⁶ Con anterioridad a esta interpretación, la doctrina y la jurisprudencia descansó el concepto de responsabilidad en la existencia de tres elementos, el hecho, el daño y el denominado nexo de causalidad.

“La imputación exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica, en la que se debe determinar la atribución conforme a un deber jurídico (que opera conforme a los distintos títulos de imputación consolidados en el precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio –simple, presunta y probada-; daño especial –desequilibrio de las cargas públicas, daño anormal-; riesgo excepcional). Adicionalmente, resulta relevante tener en cuenta los aspectos de la teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado. (...) Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad, según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarle al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica. Debe quedar claro, que el derecho no puede apartarse de las “estructuras reales si quiere tener alguna eficacia sobre las mismas”. En cuanto a esto, cabe precisar que la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva, título autónomo que “parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las decisiones”. Siendo esto así, la imputación objetiva implica la “atribución”, lo que denota en lenguaje filosóficojurídico una prescripción, más que una descripción. Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de “cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta”. (...). Dicha tendencia es la que marcó el precedente jurisprudencial constitucional, pero ampliando la consideración de la imputación (desde la perspectiva de la imputación objetiva) a la posición de garante donde la exigencia del principio de proporcionalidad es necesario para considerar si cabía la adopción de medidas razonables para prevenir la producción del daño antijurídico, y así se motivara el juicio de imputación. Dicho juicio, en este marco, obedece sin lugar a dudas a un ejercicio de la ponderación que el juez está llamado a aplicar, de tal manera que se aplique como máxima que: “Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro”. (...) la responsabilidad extracontractual del Estado se puede configurar una vez se demuestre el daño antijurídico y la imputación (desde el ámbito fáctico y jurídico)”⁷

Podemos definir el nexo causal como la relación que debe existir entre el comportamiento o conducta del agente y el resultado desfavorable producido; esta confrontación causal tiene que hacerse a través de un estudio retrospectivo donde se tienen en cuenta los sucesos acaecidos que se considera han sido el antecedente de la consecuencia producida, teniendo siempre presente que en este proceso cada antecedente es un eslabón más de la cadena causal que ha intervenido en la generación del hecho que se investiga, en otros términos lo que se busca es demostrar la presencia de un vínculo necesario entre un antecedente (causa) y un consiguiente (efecto)

⁷ Sección Tercera, Subsección C, Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sentencia del veinticinco (25) de julio de dos mil once (2011), radicación número: 25000-23-26-000-1998-00731-01(19434), Actor: Luis Enrique Ruiz Quiroga y otros vs Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional.

Por consiguiente, para lograr establecer la causa en el evento sub-lite, debemos acudir al antecedente de la institución demandada, es decir la omisión en el cumplimiento de sus deberes constitucionales y reglamentarios. Demostrando de forma contundente que la acción anormal fue la causa eficiente del daño causado al reclamante, en otros términos, evidencia claramente la relación causal entre la irregularidad administrativa y el daño; por lo tanto, al concurrir los componentes del régimen de responsabilidad de la falla o falta del servicio, deberá instarse a la institución pública el deber de resarcir toda lesión a bien jurídico o perjuicio originado a nuestros mandantes.

CONCLUSIÓN

Esto demuestra de forma contundente que el hecho imputado ha sido la causa eficiente del daño causado al reclamante, en otros términos, evidencia claramente la relación causal entre la omisión o irregularidad administrativa y el daño; por lo tanto, al concurrir los componentes del régimen de responsabilidad de la falla o falta del servicio, deberá imponerse a la institución el deber de resarcir toda lesión o perjuicio originado a nuestros mandantes.

DEL MEDIO DE CONTROL A EJERCER

Esta controversia de carácter particular en vía judicial corresponde a una demanda de Reparación Directa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011.

MANIFESTACIÓN BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO

De conformidad con el literal d del Decreto 2511 de 1998, y del Decreto 1069 de 2015, nos permitimos manifestar bajo la gravedad de juramento que no hemos presentado demanda o solicitud de conciliación con base en los mismos hechos.

ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA

Atendiendo lo dispuesto en el artículo 157 de la ley 1437 de 2011, que indica que la cuantía se determinará, tratándose de varias pretensiones; por el valor de la pretensión mayor, nos permitimos estimar razonadamente la cuantía de ciento setenta millones de pesos (\$170.000.000) correspondientes al "perjuicio material", en la modalidad de lucro cesante a favor del reclamante Carlos Florez

La anterior cuantía deberá tomarse en consideración para todos los efectos legales.

RELACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS

Solicitamos al señor Procurador Judicial delegado ante lo Contencioso Administrativo se tengan como medios de prueba los siguientes documentos aportados con la solicitud de convocatoria:

1. Poder debidamente otorgado por los convocantes
2. Fotocopia de los documentos de identidad de los convocantes
3. Fotocopia del registro civil de nacimiento de Carlos Enrique Flórez
4. Fotocopia de la historia clínica perteneciente al señor Carlos Enrique Flórez
5. Fotocopia de la declaración Extra juicio No. 02395, Notaria Octava del Circuito de Cali
6. Informe pericial de Clínica Forense fechado para los once (11) días del mes de abril del año dos mil veintitrés (2023)
7. Petición dirigida al Benemérito Cuerpo de Bomberos a los doce (12) días del mes de julio del año 2023 en donde se solicita se sirvan aportar el registro de atención prehospitalaria realizada a mi presentado para la fecha de los hechos.
8. Respuesta por parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos a la solicitud realizada con radicado No.2023-00656-00
9. Petición dirigida a la alcaldía Santiago de Cali en el mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023) con radicado N°202341730100522192 donde se solicita certificación en la que se indique qué entidad está a cargo del mantenimiento de la malla vial donde Jhon presentó el accidente
10. Respuesta a la petición dirigida a la alcaldía Santiago de Cali con fecha de veintiocho (28) de marzo del año dos mil veintitrés (2023), firmada por Eliana Martínez Tenorio- Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial.
11. Extracto Bancarios Banco Caja social para el periodo del 01 de enero del 2022 al 31 de enero del 2022
12. Extracto Bancarios Banco Caja social para el periodo del 01 de febrero del 2022 al 28 de febrero del 2022

13. Extracto Bancarios Banco Caja social para el periodo del 01 de marzo del 2022 al 31 de marzo del 2022
14. Verificación con cédula del poderdante en el Portal Web del Simit, en donde se evidencia que no cuenta con multas por accidentes de tránsito
15. Verificación en el Runt donde se evidencia que para la fecha de los hechos el automotor contaba con los documentos vigentes
16. Licencia de conducción del señor Carlos Enrique Flórez renovada al 2023
17. Verificación del SPOA en el Portal Web de la fiscalía general de la Nación donde se radicó el denuncia en tiempo, modo y lugar
18. Material fotográfico del lugar de los hechos donde se presentó el siniestro vial, al mismo tiempo de las lesiones que presento mi poderdante a raíz del suceso.
19. Acta de audiencia de conciliación expedida por la Procuraduría 58 Judicial I para asuntos administrativos de Santiago de Cali.
20. Certificación expedida por la Procuraduría 58 Judicial I para asuntos administrativos de Santiago de Cali.

I. MEDIOS DE PRUEBA A PEDIR SEAN DECRETADAS POR EL DESPACHO

TESTIMONIALES

Solicitamos al H. Juez de Conocimiento se sirva hacer comparecer a las siguientes personas, quienes depondrán sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que resultó lesionado el señor Carlos Enrique Flórez; en especial del supuesto fáctico Cuarto y siguientes del acápite de HECHOS de la reclamación, ratificarán el material documental obrante, así como absolverán otros interrogantes que surjan en el momento de la diligencia:

GIORDAN FERNANDO BURBANO identificado con cédula de ciudadanía No 1. 113.626.783 de Palmira, residente en la avenida 2 A norte 75H-89 Conjunto residencial los sauces Barrio Brisas de los Álamos, correo e. giordanburbano@gmail.com. Tel 312 260 15 36

SANDRA MARCELA ANTE SALAZAR identificada con cédula de ciudadanía No 1.130.683.596 de Cali, residente en la avenida 2 A norte 75H-89 Conjunto residencial los sauces Barrio Brisas de los Álamos, correo e. sandraante07@gmail.com. Tel 350 239 95 70

PAULA ANDREA BEDOYA APARICIO identificada con cédula de ciudadanía No. 1.113.515.554 de Candelaria, residente en la carrera 12c # 49-55 Barrio Villa Colombia, correo e. paulabedoya0209@gmail.com. Tel 313 568 95 62

BRAYAN STIVEN ARANGO SANCHEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.144.165.516 de Cali, Valle, residente en la carrera 54 # 14-34 Unidad Residencial Gratamira. correo e. brayanarango86@gmail.com. Tel 318 524 04 49.

Solicitamos al H. Juez de Conocimiento se sirva hacer comparecer a las siguientes personas, quienes depondrán sobre los perjuicios físicos- psicológicos que generó el accidente al señor CARLOS ENRIQUE FLÓREZ; en especial del supuesto fáctico primero, segundo, quinto, sexto y siguientes del acápite de HECHOS de la reclamación, ratificarán el material documental obrante, así como absolverán otros interrogantes que surjan en el momento de la diligencia:

RUTH MIREYA SALAZAR MURILLO identificada con cédula de ciudadanía No 31.273.246 de Cali, residente en la calle 12 oeste 41-36 Barrio Montebello, correo e. mireyasalazar0728@gmail.com, tel. 311 751 28 98

LUZ ELENA FIGUEROA FLOREZ identificada con cédula de ciudadanía No 31.906.205 de Cali, residente en la carrera 11 # 59-78 Barrio Los Almendros, correo e. leffs@hotmail.com, tel. 318 505 42 95

Solicitamos al H. Juez de Conocimiento se sirva hacer comparecer a la presente diligencia al auxiliar de enfermería Andrés Mauricio Valencia CC. 1.112.495.265 RES 762950 Adscrito al Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, correo institucional notificaciones@bomberoscali.org quien prestó el servicio de atención prehospitalaria al señor Carlos Enrique Flórez para la fecha del siniestro, con el fin de que sirva declarar al despacho en tiempo, modo y lugar la prestación del servicio de salud para con mi poderdante.

INTERROGATORIO DE PARTE

Atendiendo la posibilidad que permite el artículo 198 de la ley 1564 de 2012 pedimos⁸

⁸ El artículo 203 de la legislación adjetiva anterior consagró la figura del interrogatorio a instancia de parte, medio de prueba que consistía en que cualquiera de las partes podía pedir la citación de la contraria a efectos de interrogarla sobre hechos relacionados con la litis. Sin embargo, en la ley 1564 de 2012, bajo esta misma figura se permite la citación a instancia de cualquiera de las partes, aún de su mismo apoderado, desapareciendo la restricción en su petición, es decir que únicamente se hacía respecto de la parte contraria. La declaración de la parte, por su manifiesto interés personal en el resultado favorable, históricamente ha estado en el centro de intensas polémicas. Se rechazó su confiabilidad respecto de los hechos que benefician al declarante, especialmente en el revaluado sistema probatorio del proceso esencialmente escrito, donde se limita la eficacia probatoria de la declaración de parte a la confesión y el

respetuosamente al despacho se sirva disponer la citación del señor CARLOS ENRIQUE FLOREZ identificado con cédula de ciudadanía No 94.416.910 de Cali.

PERICIALES

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 3 el artículo 212 de la ley 1437 de 2011³¹, solicitamos al H. Juez de Conocimiento se sirva ordenar la siguiente pericia, encaminada a demostrar el daño alegado, en especial sobre los supuestos décimo acápite HECHOS de este escrito demandatorio

Remitir al señor **CARLOS ENRIQUE FLOREZ**, titular de la cédula de ciudadanía No. 94.416.910 de Cali (V), a la Junta Regional de Calificación de la Invalidez del Valle del Cauca, ubicado en la calle 5 E No. 42 - 44 – Santiago de Cali; para que le sea practicado un reconocimiento médico y se sirvan determinar a pérdida de capacidad laboral, como consecuencia de las afecciones físicas y perturbaciones psicológicas/psiquiátricas derivadas del evento sufrido a los veinticinco (25) de abril del años dos mil veintidós (2022)

OPORTUNIDAD DEL MEDIO DE CONTROL

Con fundamento en el artículo 164 numeral 2 literal i de la ley 1437 de 2011, nos encontramos dentro del término para instaurar la demanda de Reparación Directa.

ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA

Atendiendo lo dispuesto en el artículo 157 de la ley 1437 de 2011, que indica que la cuantía se determinará, tratándose de varias pretensiones; por el valor de la pretensión mayor, nos permitimos estimar razonadamente la cuantía de ciento setenta millones de pesos (\$ 170.000.000) correspondientes al “perjuicio material”, en la modalidad de lucro cesante a favor del señor Carlos Enrique Flórez

juramento probatorio, estimatorio o deferido por la ley. No obstante, los modernos sistemas que adoptan la victoriosa oralidad, entre ellos el del CGP, al acrecentar la inmediación y la libre valoración de las pruebas, engrandecen el significado principal del contacto personal e inmediato del juez con las partes y prácticamente sin excepción reconocen el vigor y la eficacia probatoria de la simple declaración de parte, obtenida en un interrogatorio libre que podrá ser ordenado por el juez en cualquier momento con fines aclaratorios o de clarificación, sin perjuicio del interrogatorio formal o de absolución de posiciones que tradicionalmente era el único que se practicaba, a solicitud de los litigantes, con miras a obtener la confesión de la contraparte. CANOSA Suárez, Ulises. “Código General del Proceso. Aspectos Probatorios” en XXXIII, Congreso Colombiano de Derecho Procesal. Universidad Libre. Bogotá D.C. – Colombia. Primera Edición - septiembre 2012. En este sentido el H. Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, con ponencia de la Dra. Zoranny Castillo en auto interlocutorio 396 del 11 de diciembre de 2018 dentro del proceso radicado bajo el número 7600013333016201700069, Demandante: Andrés Perea Hurtado, Demandado Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, sostuvo: Así entonces, sobre la procedencia del decreto de la prueba el despacho revocará la decisión considerando que, si bien es cierto del enunciado inicial del artículo 184 del CGP transcrito podría inferirse que solo puede citarse a interrogatorio a la contraparte, lo cierto es que de la totalidad del capítulo que regula la práctica, y finalidad de la prueba se infiere que ella no está limitada a tal evento; el hecho de que la confesión en materia contenciosa no esté proscribida, excepto para los representantes legales de las entidades públicas por expresa disposición del artículo 195 ob. cit., permite colegir que nada impide que la propia parte pida su interrogatorio y asuma sus efectos en caso de que se den los requisitos del artículo 191 ídem para que se tenga como hecho confesado. Lo anterior, aunque parezca ilógico, encuentra fundamentos en que el proceso oral por audiencias en donde se privilegia el principio de inmediación de la prueba, permite con el interrogatorio de parte, en el cual incluso se puede hacer diligencia de reconocimiento de documentos, provocar confesión, etc. que el Juez y la propia contraparte se haga una mejor idea de la teoría de caso de la parte interesada autocitante provoque un ejercicio de contradicción de la prueba de mayor complejidad y por ende un despliegue de mejor manera el derecho a la defensa incluso tiene un efecto psicológico en el debate al poder conocer el sentir y como lo expresa la parte interesada. (Negrilla fuera de texto)

La anterior cuantía deberá tomarse en consideración para todos los efectos legales.

COMPETENCIA

Por haber ocurrido los hechos en jurisdicción del municipio de Santiago de Cali (V), de conformidad con la cuantía establecida, lo es competente el Juzgado Administrativo del Circuito Judicial de Santiago de Cali, como lo indica el numeral 6 del artículo 156 de la ley 1437 de 2011 y el Acuerdo 3321 de 200633.

ANEXOS DE LA DEMANDA

Nos permitimos aportar con el libelo de la demanda Los documentos señalados en el acápite de RELACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS.

NOTIFICACIONES

El suscrito apoderado

Calle 11 N° 5-61 edificio Valher- Cali, oficina 705

Correo electrónico. agtabogadosyassociados@gmail.com, juliar45@hotmail.com

Los demandantes

Correo e. agtabogadosyassociados@gmail.com

Las entidades demandadas

Municipio de Santiago de Cali, representado por el alcalde, el Doctor Jorge Iván Ospina o quien haga sus veces, Centro Administrativo Municipal (CAM) Avenida 2 Norte No. 10 – 70 de Cali,

Correo electrónico notificacionesjudiciales@cali.gov.co

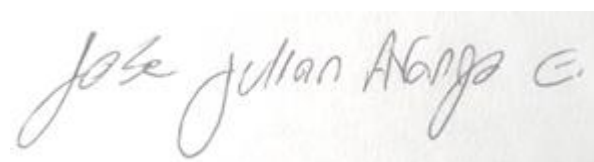
Secretaria de Infraestructura de Santiago de Cali, representado por el alcalde, el Doctor Jorge Iván Ospina o quien haga sus veces, Centro Administrativo Municipal (CAM) Avenida 2 Norte No. 10 – 70 de Cali, teléfono 8810036

Correo electrónico notificacionesinfraestructura@cali.gov.co

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
Carrera 7 N° 75-66 Centro Empresarial C75- Bogotá
Teléfono (2558955)

Correo electrónico. Procesos@defensajuridica.gov.co

Del Honorable Juez,



JOSÉ JULIÁN ARANGO ESCOBAR
C.C. No.1.116.258.847 de Tuluá
T.P. No. 352.270 del C.S.J
ABOGADO



ABOGADOS & ASOCIADOS

Santiago de Cali, marzo del 2023

Señores

JUZGADO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO – Reparto-
Ciudad



CARLOS ENRIQUE FLOREZ, MARIA BLANCISNET FLOREZ RIOS, LIZBETH JOHANA GUERRERO GARCIA, identificados como aparece al pie de nuestras firmas, manifestamos por el presente documento que conferimos PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE al abogado **JOSÉ JULIÁN ARANGO ESCOBAR** titular de la cédula de ciudadanía No. 1.116.258.847 de Tuluá, con Tarjeta Profesional de Abogado No.352270 proveída por el Consejo Superior de la Judicatura, para que en nuestro nombre y representación inicie y adelante ante esa jurisdicción demanda de Reparación Directa en contra del **MUNICIPIO CALI** y Secretaria de
Infraestructura vial a fin de



obtener un acuerdo respecto de la indemnización que corresponda como consecuencia de las perturbaciones psicológicas y económicas sufridas por el señor **CARLOS ENRIQUE FLOREZ** a los veinticinco (25) días del mes de abril del año dos mil veintidós (2022) cuando se movilizaba en calidad de conductor de la motocicleta de placa HVW06D, marca Bajaj a la altura de la carrera 23 con calle 6A, barrio Alameda Cali y presento volcamiento debido a un bache o levantamiento de asfalto que se encontraba en la vía sin ningún tipo de señalización.

Nuestro apoderado queda ampliamente facultado para recibir, cobrar, conciliar, desistir, sustituir, reasumir y en general todas las facultades que la ley otorga.

Sírvase reconocer su personería.

Atentamente,

CARLOS ENRIQUE FLOREZ
CARLOS ENRIQUE FLOREZ
C.C 94.416.910 de Cali

Maria Blancisnet Florez Rios
MARIA BLANCISNET FLOREZ RIOS
C.C 38.973.611 de Cali



Lizbeth Johana Guerrero
LIZBETH JOHANA GUERRERO GARCIA

C.C 1.143.841.985 de Cali

PODERANTES

Jose Julian Arango Escobar
JOSÉ JULIAN ARANGO ESCOBAR

C.C. No. 1.116.258.847 de Tuluá

T.P. No. 352270 del C.S.J

Correo: juliar45@hotmail.com

ABOGADO

NOTARIA NOVENA DE CALI
notariacali9@yahoo.com.mx

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO, FIRMA Y HUELLA

Ante la Notaria Novena (9) del Circulo de Cali, Compareció:

FLOREZ RIOS MARIA BLANCISNET
quien exhibió C.C. 38973611 de
y declaró que la firma y huella que aparecen en el presente documento son suyas y que el contenido del mismo es cierto.

CALI 21/04/2023 a las 10:59:13 a. m.

que los datos ingresando a www.notariaenlinea.com

X8M1M9VU1MOKFJXU

Maria Cecilia Alvarez Perera
FIRMA

MARIA CECILIA ALVAREZ PERERA
NOTARIA NOVENA (9) DE CALI

EMR Huella

Esta diligencia se tramita a solicitud del Compareciente. Previa advertencia del Decreto 2150/05 y Decreto 2148/03

NOTARIA NOVENA DE CALI
notariacali9@yahoo.com.mx

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO, FIRMA Y HUELLA

Ante la Notaria Novena (9) del Circulo de Cali, Compareció:

GUERRERO GARCIA LIZBETH JOHANA
quien exhibió C.C. 1143841985 de
y declaró que la firma y huella que aparecen en el presente documento son suyas y que el contenido del mismo es cierto.

CALI 21/04/2023 a las 8:37:05 a. m.

Verifique los datos ingresando a www.notariaenlinea.com

Q17CNM9HR13BGD94TT

Lizbeth Johana Guerrero Garcia
FIRMA

MARIA CECILIA ALVAREZ PERERA
NOTARIA NOVENA (9) DE CALI

JSR Huella

Esta diligencia se tramita a solicitud del Compareciente. Previa advertencia del Decreto 2150/05 y Decreto 2148/03

NOTARIA NOVENA DE CALI
notariacali9@yahoo.com.mx

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO, FIRMA Y HUELLA

Ante la Notaria Novena (9) del Circulo de Cali,
Compareció:

FLOREZ CARLOS ENRIQUE
quien exhibió C.C. 94416910 de
y declaró que la firma y huella que aparecen en el
presente documento son suyas y que el contenido
del mismo es cierto.

CALI 21/04/2023 a las 2:40:25 p. m.

Verifique los datos ingresando a
www.notariaenlinea.com

8DVOY7KNZZE8GDPL





Huella

Esta diligencia se tramita
solicita del Comparecedor
Previo advertencia del
Decreto 2150/95 y Decreto
2148/93



FIRMA

MARIA CECILIA ALVAREZ PEREIRA
NOTARIA NOVENA (E) DE CALI

